REVISTA

PUGNA CAUDILLISTA ENTRE ZAVARCISTAS Y ALCANTARISTAS EN CARABOBO, VENEZUELA, AÑO 1876

Por: Jaime A. Ybarra M* y Raúl Meléndez M**

Jaimeybarra2004@hotmail.com, raulmlndez@hotmail.com

* Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Carabobo

** Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo

RESUMEN: El trabajo investigativo que sigue versa sobre la pugna caudillista suscitada entre Zavarcistas (partidarios de Hermenegildo Zavarce) y alcantaristas (partidarios de Francisco Linares Alcántara), en el año de 1876 en Carabobo. La hostilidad intercaudillista ocurrida a finales del período gubernamental llamado Septenio de Guzmán Blanco, derivó en enfrentamientos armados en todo el país y en la región objeto de estudio. Dicha situación violenta fue producto de luchas caudillistas entre afectos de los dos aspirantes a la presidencia de la República venezolana en las elecciones de 1876. Para teorizar sobre este hecho histórico nos basamos en trabajos investigativos de estudiosos de las relaciones y militares, y otros temas afines.

Palabras clave: Pugna, caudillismo, relaciones civiles-militares, pirámide caudillista.

ABSTRACT: The investigative work that still deals with the struggle between strongman raised Zavarcistas (supporters of Hermenegildo Zavarce) and alcantaristas (supporters of Francisco Linares Alcántara), in the year 1876 in Carabobo. Hostility intercaudillista occurred at the end of the period of government called Septenio Guzmán Blanco, resulted in armed clashes throughout the country and the region under study. This situation was the product of violent struggles between the leader affections of the two candidates for the presidency of Venezuela in the elections of 1876. To theorize about this historical fact we rely on the investigative work of scholars and military relations, and other related topics.

Key words: Conflict, warlordism, military relations, pyramid leader.

Introducción

El trabajo investigativo que sigue, da cuenta de la pugna caudillista que se suscitó entre zavaristas (partidarios de Hemenegildo Zavarce) y alcantaristas (partidarios de Francisco Linares Alcántara), en el año de 1876 en Carabobo.

Esta contienda armada cabe dentro de la inestabilidad institucional y el personalismo exacerbado de los diferentes caudillos del siglo XIX venezolano. En este contexto enmarcamos el fenómeno abordado. Por una parte dibujamos el panorama de violencia social que existió en el país a partir de 1830, tiempo en el cual se rompió con la estructura jurídica formal gubernativa colonial, destacando la existencia de un caudillismo anárquico – excepto el gobierno de José Tadeo Monagas – y por la otra resaltamos el caudillismo despótico llevado a cabo por Antonio Guzmán Blanco.

Estos dos momentos que no vienen a ser sino un solo decurso histórico, servirá para comprender las relaciones civiles – militares en Venezuela, y por ende el tiempo histórico abordado.

De 1830 a 1870 el cuadro social del país estará plenario de tensiones sociales por los diferentes combates armados, guerras y «revoluciones» efectuadas. Este estado turbulento es el que caracterizamos en la indagación como: caudillismo anárquico, hecho en el cual existieron los ejércitos particulares de caudillos disgregados por las diferentes zonas de esa Venezuela, que en su mayor parte, sufrió de un aislamiento regional; el caudillo anárquico obedecía a su caudillo principal o nacional, sin embargo adversaba a su par, y es por ello que se daban los levantamientos armados de las distintas tropas.

A partir de 1870 otra escena eclosionará en Venezuela, el caudillismo despótico, que respondía a las apetencias de Guzmán Blanco, de querer reiniciar la implantación del Estado Liberal que a inicios de 1830 y en sus primeros años fue un intento fallido. El caudillo despótico en cuestión, logrará crear una pirámide caudillesca donde se da una red de subordinaciones desde el vértice (Guzmán Blanco) hasta el último caudillo local.

El tejido de obediencias entre los distintos caudillos propenderá a crear en el país una relativa paz, sin embargo aun después de la derrota de León Colina en 1872, se presentaron algunos enfrentamientos armados de tipo caudillista en eventos electorales.

Estos hechos de violencia o pugnas armadas aparecieron en el estado Carabobo en el año de 1876 al término del llamado Septenio o primer gobierno de Guzmán Blanco. Se necesitaba de alguien que figurase como sucesor del «Ilustre Americano», y en esa lid electoral se anotaron -a parte de otros afectos a Guzmán-, Hermenegildo G. Zavarce y Francisco Linares Alcántara, quienes capitalizaron la mayoría de los sufragantes del país, de Carabobo y estados vecinos.

En el marco de las elecciones de 1876 se registró la aludida pugna caudillista, y para teorizar sobre este hecho histórico nos basamos en trabajos investigativos de: Samuel P. Hungtinton, Amos Perlmutter, Robert Gilmore, Graciela Soriano de García Pelayo, Inés

Guardia Rolando, Diego Bautista Urbaneja y Domingo Irwin. De estos estudiosos de las relaciones civiles y militares y otros temas afines se deriva la indagación que sigue.

Entre el caudillismo anárquico y el despótico: Una síntesis histórica

El lecho de la Venezuela del siglo XIX fue pisoteado históricamente por el trajinar del caudillismo. Y es que este fenómeno se suscita después que, quienes habían anhelado romper con la estructura jurídica formal gubernativa colonial lo logran instaurando la Primera República de 1811. A partir de entonces, específicamente en 1812, se inicia en el país la modalidad de caudillismo anárquico que Irwin (1996) denomina como... «una lucha generalizada entre caudillos rurales por el ejercicio del poder, sin que ninguno de los sectores en pugna logre consolidar su autoridad a lo largo y ancho del territorio nacional». (p.8)

Este panorama caótico y conflictivo impregnado de violencia social se intensificará además por las crisis económicas de la actividad cafetalera en las primeras cuatro décadas del siglo XIX.

Las vicisitudes se van a presentar cuando se sancionan leyes como la Ley de Libertad de Contratos de 1834 (Ley del 10 de abril) beneficiosa para los comerciantes – prestamistas y que afectaba a los hacendados quienes perdían sus heredades – al ser sus propiedades rematadas por los Tribunales Mercantiles-, por deudas contraídas; y la Ley de Espera y Quita de 1849, instrumento jurídico que llegó a beneficiar a los hacendados, al menos ese será el espíritu de dicha ley.

No solamente las pugnas en la sociedad venezolana se daban exclusivamente por cuanto la ley pudiera beneficiar o no a los sectores arriba señalados, también otros estratos sociales solicitaban sus reivindicaciones de las cuales tradicionalmente habían sido excluidos, se trataba de pardos libres que al decir de Pino Iturrieta (1992)

Desde finales de 1843 promovieron rebeliones en los cuales acusaron a los blancos de su mala situación y atacaron las haciendas. Así pasó en zonas de Carabobo y Portuguesa, en Calabozo y Villa de Cura. Estaban al frente de las turbulencias unos individuos hasta entonces desconocidos – sin instrucción, sin empleo fijo, sin apellido, sin bienes de fortuna-... (p.113). (En: *Historia mínima de Venezuela*).

Esta realidad es más que elocuente; aun casi a mediados del siglo XIX, no se habían satisfecho las aspiraciones socioindividuales del conjunto social venezolano, todavía se manifestaban los rezagos críticos que nos legaron nuestros antecedentes coloniales y la guerra de independencia. Es por ello que Carrera Damas (1991) considera los hechos bélicos del siglo XIX como un *continuum* cuyos precedentes nos vienen desde que pertenecíamos a la metrópolis española, y que esos fenómenos beligerantes tenían su razón de ser porque existían factores: económicos, sociales, políticos y otros que activaban dicha contienda; entonces la guerra de independencia es inseparable de las guerras civiles porque formaba parte de esa crisis histórica, que fue una expresión de ese proceso socioeconómico.(p.93).

Este estado de tensión social se agudiza por las intermitentes guerras civiles que se suscitaron cuando los actores políticos pertenecientes al procerato actuante en la guerra de independencia venezolana, pretendían detentar el poder. Pensaban los otroras integrantes de las luchas emancipatorias al lado de Bolívar que habían heredado la «facultad de gobernar» a Venezuela porque se sentían impregnados de esa gloria. José Antonio Páez, al inicio del ejercicio de su gobierno, como primer magistrado de la República elimina el fuero militar, relegando a un segundo plano al sector de los «Padres y Fundadores de la República», y dentro de este marco fue elegido José María Vargas como Presidente de la República. Sin embargo no faltarían las disputas y las censuras por parte de los insignes próceres conformantes del desaparecido Ejército Libertador. Los rivales de Páez dieron al traste con el primer ensayo civil, el primero de la República de 1830. Garantizaba la personalidad de Vargas, como ductor de la República, la conservación del Estado de Derecho para avanzar en la construcción del orden civil en correspondencia con el proyecto liberal de 1830, pero los «héroes» la guerra no podían aceptar esa situación.

Esta realidad conflictiva traerá como consecuencia que dos personajes de la vida política del siglo XIX venezolano – Páez y Antonio Leocadio Guzmán – se disputen la presidencia de la República hacia 1846, en medio de promesas y rebeliones. Todo este escenario trajo a colación el ejercicio del poder de forma personalista el cual se dio por varias circunstancias que Soriano (1996) nos describe como «... - situaciones de guerra – desorden social, debilidad institucional y jurídica, inestabilidad política-»... (p.25).

Con ánimos de enrumbar el barco de la República hacia ese norte que se había perdido, José Tadeo Monagas, quien llega de la mano de Páez, y quien posteriormente dará el «salto de talanquera», logra complicar las cosas por su posición complaciente con los liberales y execra del ejercicio del poder a los representantes conservadores. Pero el gobernante en cuestión no logra enrumbar la nave por destinos predecibles, más bien su gobierno estará marcado por el nepotismo y la autocracia.

Este caudillo estructura, a decir de Irwin «un modelo peculiar de relaciones civiles - militares donde una élite particular, los caudillos, son los que ejercen el poder político y a un tiempo controlan el aparato militar. Sería pues un modelo de relaciones civiles – militares de carácter tradicional» (Ibíd; p.11).

El caudillo mayor de los Monagas practica el caudillismo despótico, éste será el principal agente político que controlará la sociedad. Esto lo demuestra con la búsqueda de apoyo después del «asesinato del Congreso de 1848». Pino Iturrieta asevera que este autócrata «ordenó la formación de una milicia de reserva sujeta a su exclusivo mando, que ejercía por intermedio de oficiales venidos de Maturín»... (Ibid; p.116). Buscaba el oriental tejer esa red de relaciones: caudillo local – regional y nacional, para imponer su autoridad y evitar que se prolongara la guerra civil.

Inaugura Monagas un sistema político de acento caudillesco, personalista y despótico que deviene en el resquebrajamiento de las instituciones militares, dado además por la

carencia de una doctrina militar que hiciera énfasis en los valores éticos y morales del sector castrense.

Se conforma entonces un modelo de relaciones civiles – militares de corte tradicional donde el caudillo detenta los cargos gubernamentales del área civil como del área militar.

Esta será la realidad del siglo XIX venezolano; sin embargo, a principios del siglo XX cambiará con la centralización del ejército venezolano, y con ello se inicia y se pone en práctica los principios morales que fortalecerán el sentido de pertenencia del militar con respecto a la institución, al Estado y a la patria.

Después del fin de la dinastía de los Monagas, el país aun no estaba en calma, cuando otro fenómeno bélico: La Guerra Federal o Guerra Larga cuya contienda ocurrió en el lapso de 1859 a 1863, se librará en muchas regiones del país. Zamora dará el grito de federación en Coro y dirigirá las milicias con el fin de vigorizar el sistema político que profesaba; al lado del general del Pueblo Soberano se incorpora Juan Crisóstomo Falcón, quien fortalece el movimiento reivindicativo de las autonomías regionales.

Después que Falcón y Zamora actuaron juntos en la Batalla campal de Santa Inés, muere Zamora en el sitio de San Carlos el 1º de enero de 1860. Posterior al deceso de este caudillo, Falcón jefaturará el movimiento profederalista y se le unirán hombres como Joaquín Crespo, Matías Salazar y Francisco Linares Alcántara quienes nacen del pueblo federal.

En el transcurso de la Guerra Federal, Páez, en 1861, vuelve por sus fueros tomado de la mano de Pedro José Rojas, propagandista y asesor del anciano caudillo, sin embargo los federales, con Falcón a la cabeza, controlan casi todo el país. El panorama resultante de este conflicto bélico impactó negativamente el país: los dos mil grandes y pequeños combates dejaron como saldo 200 mil muertos, la agricultura abatida, y un comercio inoperante.

El cese de estas hostilidades se resuelve mediante la firma del Tratado de Coche el 22 de marzo de 1863, convenio que «le obsequiará la paz» al país, aun cuando en este acuerdo privó mucho el factor económico. La discusión, en este momento civilizada, deriva en la promulgación de la Constitución Federal de 1864 y la elevación de Juan Crisóstomo Falcón a la primera magistratura, y por supuesto «amigablemente» son despejados del poder los derrotados.

El manejo que hizo Falcón del país, cual si este fuera un fundo, la negligencia y la rapiña demostrada en el cargo, trajeron como consecuencia un centenar de insurrecciones locales por la decepción que había causado el sistema federal de gobierno; esto derivará en la eclosión de la denominada Revolución Azul, conflicto político que Rodríguez Campos (1997) señala como una sublevación «mediante la cual diversos sectores políticos y regionales, más o menos puestos de acuerdo, derrocaron al presidente de la República Juan Crisóstomo Falcón y a su sucesor interino Manuel Ezequiel Bruzual» (*Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar*, p. 901, año 1997).

Se origina en 1868 el régimen denominado por la historiografía venezolana como gobierno de «Los azules» y pasarán dos años para el surgimiento de otra revolución; serán los otroras partidarios de Falcón quienes den al traste con la establecida Revolución Azul.

Llegada de Guzmán al poder

La Revolución de Abril fue llevada a cabo por Antonio Guzmán Blanco a partir del 14 de febrero de 1870. Este caudillo de la Guerra Federal, con algunos disidentes de la Revolución Azul, hace oposición al régimen implantado.

Nuevamente, por la pugna sucesoral entre los herederos de José Tadeo Monagas, aunado a la anarquía consuetudinaria que reinaba en el país, llegarán al poder por vía de facto un grupo de caudillos que iniciarán la dominación política de Antonio Guzmán Blanco, la cual se extenderá hasta 1888 de manera directa. Hombres como: José Ignacio Pulido, Joaquín Crespo, Matías Salazar, León Colina, Joaquín Salazar, Hermenegildo Zavarce, Francisco Linares Alcántara, Andrés Borges y José Félix Mora, caudillos de: los Llanos de Barinas, Llanos centrales, Carabobo, Cojedes, Coro, Guayana, Yaracuy, Aragua y Puerto Cabello respectivamente, combatirán y vencerán al gobierno de los «azules» y prepararán el camino para que Guzmán el 26 y 27 de abril de 1870 tome Caracas y deponga el gobierno de José Ruperto Monagas. De esta manera, Antonio Guzmán Blanco conquista la jefatura del país alargando sus períodos de gobierno hasta el año señalado, 1888, de forma directa y hasta 1899, año de la muerte de Guzmán Blanco en París, de forma indirecta.

En este breve recuento histórico que nos caracteriza el panorama bélico del siglo XIX venezolano podemos observar la forma de arreglar los problemas de tipo político. Se llegaba al poder por la vía de facto, no había posibilidad de que se llevase a cabo el control civil por parte de los civiles. La supremacía del caudillo – quien era civil pero a la vez se proclamaba como militar – hará que éste detente el poder a lo largo del siglo XIX.

Este *modus agendi* al que hemos hecho referencia nos lo comenta Irwin *et al*, (2006) en su obra colectiva afirmando que «durante el caudillismo del siglo XIX venezolano el control civil era impensable. Era una realidad dominada por la violencia física de los guerreros – políticos personalistas, de los empresarios políticos de la violencia y sus huestes armadas». (p.30)

Tratará Guzmán Blanco de torcer esta realidad referida por Irwin; intentará crear una fórmula de reparto de poder donde no menguara el predominio de los diferentes caudillos regionales y locales, reconociendo las cuotas de poder que cada caudillo poseía en su región. Sin embargo, en los primeros años a la llegada de Guzmán al poder, se suscitarán disensiones caudillistas, como los casos de Matías Salazar, José Ignacio Pulido y León Colina. Estos dos últimos se alzarán en armas contra Guzmán pero fueron derrotados por las tropas oficialistas y prácticamente «eliminados».

De los caudillos que llegaron al poder con Guzmán en la Revolución de Abril, algunos lo enfrentarán y otros lo acompañarán en el período (1870-1877) denominado el Septenio.

Dos de estos personajes serán relevantes figuras políticas de renombre nacional, al disputarse la candidatura por la Presidencia de la República entre los años 1875 – 1877; ya casi por finalizar el primer período de gobierno de Guzmán, esos actores políticos importantes, adeptos de Guzmán Blanco, serían Francisco Linares Alcántara y Hermenegildo G. Zavarce.

Ambos caudillos inician su carrera militar a partir de la Guerra Federal (1859 -1863); Alcántara combatirá a Zamora y Francisco Rangel en los preludios de la Guerra Larga en 1846. Además participará en la conocida Guerra de los Cinco Años; Zavarce al contrario acompañará al general Ezequiel Zamora en la aludida contienda bélica.

Estos dos personajes combaten en las diferentes revoluciones que hemos mencionado en párrafos precedentes, y asumen la defensa de la causa liberal (1868-1870). Esto quiere decir que dichos aspirantes formarán parte del primer período de gobierno (Septenio) de Guzmán Blanco; Alcántara será nombrado Primer Designado de la República y como tal se encargará del Poder Ejecutivo en 1873; y Zavarce asume la presidencia del estado Táchira en los años 1872 – 1873.

La adhesión de los dos caudillos al gobierno de Guzmán y la defensa a capa y espada de estos simpatizantes de la política gumancista en contra de los distintos alzamientos caudillescos que se cometieron en oposición al «Ilustre Americano», traerán a colación que Alcántara y Zavarce se disputen la primera magistratura de la República para el período presidencial 1877 – 1879. En este interín el desenvolvimiento de los acontecimientos ocurrirá de manera violenta en medio de numerosos y sangrientos enfrentamientos.

Pugna caudillista entre zavarcastas y alcantaristas en Carabobo

En aras de ejecutar el proyecto Liberal y la construcción de un Estado Nacional Liberal, Antonio Guzmán Blanco alcanza la pacificación del país a través del respeto a las autonomías regionales, llegando a pactar con los diferentes caudillos regionales para efectos del control político y militar.

Cuando Guzmán obtiene el poder en 1870 aquellos que apoyaron al ilustre Americano eran los jefes militares y políticos de sus regiones, y además poseían su propio contingente armado, según lo afirma Quintero (1994). Hace referencia esta autora a Matías Salazar en Carabobo; José Ignacio Pulido en Barinas; José Eusebio Acosta en Oriente; Joaquín Crespo en Guárico; Francisco Linares Alcántara en Aragua; Hermenegildo Zavarce en Yaracuy; Aquilino Juárez en Lara y Joaquín Salazar en Bolívar. Se trataba pues de establecer el reparto del poder y no abarcar el radio de acción regional y local de estos caudillos. (p.58).

Además de los acuerdos políticos establecidos, fue menester para Guzmán el control de las aduanas, lo que significaría garantizar el ingreso de ingentes recursos al tesoro público, aunado a la creación y normalización del Situado Constitucional ya establecido en la Constitución de 1864 lo cual derivó en el fortalecimiento del poder central, ya que desde el Ejecutivo Nacional se repartiría el presupuesto de la nación a los diversos caudillos regionales, y aquellos que eran reacios a someterse a la voluntad del caudillo nacional

simplemente no eran tomados en cuenta a la hora de distribución del erario público, constituyendo un mecanismo de control político y militar.

Esta forma estratégica del actuar de Guzmán, aún con los disentimientos que en inicios de su gobierno se suscitaron, y que fueron sofocados, traerá como consecuencia que el caudillo en cuestión logre una «paz relativa» y se maneje en el poder inteligentemente logrando en diversas oportunidades atraer algunos contendientes conservadores y llevarlos por el camino de la concordia.

La armonía estará presente en gran parte del llamado Septenio, empero el proceso eleccionario que se avecinaba (1876) para la escogencia del primer magistrado nacional que gobernaría en el Bieno (1877-1879) agitó el clima político nacional, a consecuencia de la circular que Guzmán dirigió al país en el año de 1874, y cuyo contenido lo recoge Rondón Márquez (1952) en el que aquel emplaza

Que se traiga a la plaza pública el gran tema: que surja desde ahora una docena, por lo menos, de candidatos, entre tantos despreocupados de la Revolución de Abril, así militares como civiles; que se hagan agrupaciones, se organicen sociedades eleccionarias y crujía la prensa de Estado en Estado por toda la República; que se apersona, en fin, en Venezuela en la elaboración de su porvenir, y es seguro que dentro de un año el pueblo estará votando por el candidato que represente, no la intriga, ni la sorpresa, ni el temor, ni muy menos la indolencia del pueblo, sino el querer de la mayoría formada por la transacción de los intereses transcendentales y personalidades influyentes, en combinación con las necesidades del gran porvenir de la patria. (p.304).

Con esta postura Guzmán, - quien no aceptaba ser designado para el próximo período - dejaba una ventana abierta a los aspirantes a sucederlo en el solio presidencial, y no admitía ser nominado a las elecciones de 1876 porque esa postura se lo dictaba su «espíritu demócrata», no, su intención era en realidad, al establecer en la Constitución de 1874 el período gubernamental que abarcaba dos años llamado Bienio, tener dominio sobre sus conciliábulos quienes eran controlados políticamente por Guzmán, caudillo el cual daba luz verde a quien considerase podía ser pieza de fácil movimiento en el ajedrez político de la época.

Se acogía Guzmán a lo establecido en las constituciones de 1864 y 1874, en cuyos textos legales se propendía «a establecer en las elecciones populares el sufragio directo y secreto». (*Antología Documental de Venezuela, 1492 – 1900*, Santos Rodulfo Cortés). Pero a la par que el «Regenerador de la Patria» activaba este precepto constitucional, por otro lado llamaba a militares como a civiles a organizarse en asociaciones societales eleccionarias, contraviniendo lo que recoge el autor citado en su obra en ambas constituciones señaladas, específicamente en el artículo 116 según el cual «la fuerza armada no puede deliberar, ella es pasiva o (sic) obediente... (Ibíd.; p.632). Además se violaba el artículo 97 de la Constitución de 1864 la cual estipulaba que «la autoridad militar y civil nunca serán ejercidas por una misma persona o corporación». (Ibidem; p.631).

Esta situación denota que los textos legales del siglo XIX constituían trajes a la medida de los caudillos instituyéndose dicha norma jurídica en letra muerta. Se demuestra en estas circunstancias el predominio consuetudinario del sector militar sobre el civil, cosa que fue muy peculiar del siglo XIX venezolano.

La Venezuela del siglo XIX fue muy controversial: Irwin asevera que el control civil en dicha centuria era impensable. El predominio del sector militar sobre el civil fue muy acentuado porque existía un débil control institucional; se fortalecía de esta manera la autonomía militar, el sector militar participaba ilimitadamente – eran tanto electores como electos – en los procesos electorales, sobre todo en la diatriba política eleccionaria (1875-1877) donde se enfrentaban a escala nacional las figuras políticas: Francisco Linares Alcántara y Hermenegildo G. Zavarce.

A la par que Guzmán excitaba a sus copartidarios lanzarse a la arena política, ya a finales del Septenio también se abrogaba para sí la escogencia de los candidatos, como era de esperar todos salidos de la Revolución de Abril; en 1874, puntualmente Rondón Márquez (1952) dice que

El 19 de junio dirigió otra circular a los siguientes partidarios prominentes con ruego de que colaboren con él a activar la lucha eleccionaria: Acosta, Alcántara, Doctor Carlos Arvelo, Bermúdez Cousin, Crespo, Juan Fermín Colmenares, Jacinto Gutiérrez, Rafael Márquez, Domingo Monagas, José Rafael Pacheco y Zavarce. Sin duda, era a éstos a quienes consideraba presidenciables... (Ibíd.; p.304.)

Sobre la selección de los aspirantes que sucederían a Guzmán Blanco en el proceso electoral que se avecinaba, ya al final del Septenio, también Gilmore (1964) coincide con Rondón Márquez al decir que

El cinismo del sistema electoral se trasluce por fuentes británicas y venezolanas. En 1877 Guzmán Blanco, al completar su primer período de servicio presidencial no dejaría su oportunidad de determinar a su sucesor: La candidatura para la Presidencia de la República yace entre los generales Zavarse y Alcántara, presidentes respectivamente de los Estados Falcón y Guzmán Blanco, otros ocho o nueve generales a favor de quienes había algunos votos, fueron inscritos por orden del general Guzmán Blanco, con el objeto de demostrar la extensión de la libertad de opinión en la cual, sin embargo, ni un hombre en el país cree...(p.58)¹

Estas exhortaciones lograban impulsar a los acólitos de Guzmán a incorporarse a las lides eleccionarias, por supuesto ya éste había incidido en la selección de sus aspirantes, trayendo como consecuencia que todos los candidatos provinieran de un solo partido. No obstante, se lanzaron al proceso electoral numerosos candidatos, empero los más favorecidos fueron Alcántara y Zavarce.

¹ Traducción libre nuestra, Meléndez e Ybarra, de la cita textual de la obra escrita por Robert L. Gilmore: «Caudillism and militarism in Venezuela, 1810-1910». Ohio University Press, 1964, p. 58.

Desde el mes de mayo de 1875 el órgano divulgativo La Voz Pública (periódico carabobeño) inició su llamado a todos los ciudadanos a sumarse a la arena eleccionaria. De igual forma Guzmán Blanco incitaba a Bermúdez Cousin – Presidente del estado Carabobo – a despertar el entusiasmo eleccionario en la región pero sería a mediados de 1876 que comenzaron a formarse las sociedades eleccionarias y a pronunciarse por uno u otro candidato. Nos comenta González Guinan (1954) que el:

10 de agosto, día designado por la ley, se reunieron en las diversas parroquias de la República los comicios electorales para constituir las juntas de inscripción. El acto se efectuó con no pocas violencias y consumándose algunos crímenes. Ya para esta fecha se disputaban con encarnecimiento la definitiva victoria los sectarios de las candidaturas de los generales Alcántara y Zavarce. En algunos Estados el gobierno nacional había tenido que intervenir para asegurar la libertad eleccionaria, como ya lo hemos visto en Carabobo y Barquisimeto. En Mérida y Nueva Esparta, movimientos locales derribaron los gobiernos de los Estados, y el Gobierno Nacional tuvo que enviar a ellos comisionados que restableciesen el orden... (pp. 96-97).

Visto este panorama, estamos en presencia de la anarquía política donde algunos grupos de poder querían imponer su supremacía sobre otros, acentuando de esta forma los conflictos sociales, cuyo origen, según nos expresa Guardia Rolando (2003) se daba por la

...inexistencia de medios institucionales que rijan la actividad política a través de mecanismos funcionales, eficientes y operantes; la violencia se convierte en la expresión de los procesos de competencia política; en esta situación el liderazgo político está determinado por hechos violentos y se producen y favorecen situaciones de inestabilidad política. (p. 111).²

Aun cuando operaban las Juntas de Inscripción para efectos de materializar la elección de 1876, éstas no garantizaban imparcialidad alguna, ya que no existía marco legal que impidiera a los funcionarios públicos inmiscuirse en estos asuntos. En muchas ocasiones quienes fungían como Secretarios de Estados de la entidad carabobeña advertían a quienes detentaban el poder no intervenir en los asuntos eleccionarios, tal fue el caso del Secretario de Estado Doctor Acevedo quien por medio de circular publicitada en La Voz Pública número 373 de fecha 11 de abril de 1876, recomendaba a los Jefes Departamentales la más completa neutralidad eleccionaria. Sin embargo, no había la posibilidad de frenar el actuar de esta tendencia caudillesca que buscaba según Irwin (1996)... «El ejercicio del poder de manera personalista y empleando para ello la violencia»... (Ibíd.; p.9)

Estos exhortos públicos no tenían eco en pleno proceso eleccionario que día a día se tornaba más violento; ya no se podía hacer vida social por la violencia desbordada, esto se

² Véase el artículo: «El Caudillismo: un actor político relevante en Venezuela a finales del siglo XIX», de la referida autora, en la obra: «Militares y Sociedad en Venezuela», investigación colectiva coordinada por Domingo Irwin G. y Frédérique Langue, año 2003.

evidencia en el intento de homicidio del cual fue objeto el general Francisco Cedeño el 26 de marzo de 1876 y que dio a conocer en La Voz Pública en su número 372, de fecha 6 de abril del mismo año. Nos comenta el agraviado que se encontraba postrado en una cama a causa del horroroso crimen perpetrado a su persona por los generales Modesto Leota, Gregorio Leota, Eulalio Leota, Manuel Borrego, Aniceto Pérez, Antonio Requena y otros autores.

Asevera Cedeño que a las nueve de la mañana del día referido supra, cuando se encontraba en la pulpería de Evaristo Borjas acompañado de cuatro vecinos, fue abordado por un tropel de caballería que entró al recinto donde se hallaba éste, los cuales prorrumpieron dando vivas a Francisco Linares Alcántara, y además le exigieron que vitoreara a dicho caudillo petición a la que este ciudadano hizo caso omiso, y por ende fue conminado por este grupo armado a llevarlo a su lugar de habitación donde lo esperaban los generales Manuel Borrero y Modesto Leota. Nos señala el personaje en cuestión que lo esperaban de 25 a 30 hombres bien equipados con carabinas, trabucos y lanzas de caballería; de nuevo le solicitaron sin éxito brindar loas a Alcántara por lo que fue víctima de ataques: disparos, machetazos a nivel de la cabeza, lanzazos en la pierna, brazos y cortaduras en la región pectoral.

Podemos observar cómo ciertos generales conformantes de los ejércitos particulares no respetaban la institucionalidad y participaban de la actividad política que se llevaba a cabo en Carabobo. Bien es cierto que las acciones de guerra en contra de Guzmán en el denominado Septenio disminuyeron por efecto de los compromisos del caudillo nacional con los de provincias, situación que permitía a éstos cierta hegemonía y por ende el respaldo automático al caudillo mayor. Sin embargo, en el decurso eleccionario vemos cómo se desarrollaban los acontecimientos de manera anárquica y violenta. Subsistía en este momento la base de sustentación del régimen liberal amarillo que Ramón J. Velásquez (1977) cataloga como binomio partido - ejército que constituía la fuerza de defensa del gobierno formada por los ejércitos particulares, fórmula esta que desaparecerá cuando Castro (1899-1903) organice el Ejército Nacional que desplace la dualidad partido-ejército y sea remplazada por el trípode, Jefe-Ejército-Administración que perdurará hasta octubre de 1945. (p. XI)

Aun cuando Guzmán Blanco fue un caudillo despótico con poderes concentrados, se ubicó dentro de la fórmula que Ramón J. Velásquez denomina binomio político partido-ejército, logra imponer orden administrativo en el Ministerio de Guerra y Marina; se sanciona un Código Militar de 1873; se recogen los armamentos dispersos en manos de civiles, y se concentran en depósitos de armas situados estratégicamente; no obstante en las provincias – caso Carabobo – las armas estaban esparcidas en mano de muchos caudillos. Este hecho fue tan notorio que el gobierno actuó de la manera siguiente:

Hace pocos días que el gobierno del Estado dictó una resolución prohibiendo la elaboración y venta de pólvora. Ahora ha espedido (sic) un decreto sobre recolección de armas de fuego como fusiles, rifles, etc., que se encuentren diseminados en el territorio de Carabobo, y según (sic) nos ha asegurado el señor Doctor Acevedo, Secretario de Estado, el gobierno pondrá toda diligencia en llevar

á (sic) cumplida y cabal ejecución del decreto que acaba de dictar... aplaudimos el proceder del gobierno de Carabobo; y más lo aplaudiremos cuando comience á (sic) descubrir los tantos parquesitos que es fama existen hasta en la misma ciudad de Valencia, en la Sierra y otros lugares; apartando así de la acción (sic) del bochincheraje los elementos con que pudiera atentar contra el gobierno nacional y contra los grandes intereses morales, sociales y políticos que ese mismo gobierno representa. (*La Voz Pública* 22 de abril de 1876, N° 379).

La situación que se estaba viviendo era tan grave que el Ejecutivo Regional se vio en la necesidad de expedir un decreto el cual publicó por bando en la ciudad de Valencia el 24 de abril de 1876. La intención del gobierno de la República a parte de preservar la paz de la Nación, era la de que esas armas engrosaran al parque nacional, ya que el Ejecutivo Nacional legítimamente era quien debía poseerlas. Había que acabar de una vez por todas, se manifestaba en dicho decreto, con la sociedad armada que existía en ese entonces. Perlmutter (1978) manifiesta que:

estos acontecimientos confirman el hecho histórico y político que cuando el gobierno civil no es ni efectivo ni institucionalizado el ejecutivo es incapaz de controlar a las fuerzas armadas. El colapso del poder ejecutivo es condición previa para el pretorianismo. (p.89). (*traducción nuestra*)

Este fenómeno se entiende como la injerencia por parte del sector militar en una sociedad, en la que el sector castrense ejerce el poder político recurriendo o amenazando con recurrir a la fuerza. Esta situación que Perlmutter muy bien analiza es un modelo interpretativo para reflexionar con respecto al proceso eleccionario que se celebraba en 1876 en diferentes regiones del país que González Guinan (1954) refiere

En el Estado Yaracuy sucedía igual cosa que en Carabobo, pero favoreciendo el gobierno del Estado a los adeptos del General Zavarce, por lo cual se puso en armas el jefe alcantarista General Epifanio Ruíz, conmoción que se apresuró a calmar con sus influencias el señor General Presidente de la República y también hubo disidencias en Barquisimeto (Ibíd.; pp.28-29).

Prosigue el autor citado, describiéndonos nuevamente el pandemónium que se estaba viviendo al inicio de las elecciones generales que se efectuaron en todas las parroquias de la República el primero de septiembre de 1876, en los círculos o sociedades eleccionarias de Güigüe, Naguanagua y Bejuma del estado Carabobo, y Yaritagua del estado Yaracuy, alcantaristas y zavaristas se convirtieron en combatientes armados, resultando víctima de tan exaltados enfrentamientos los generales Julián Castro Briceño, en Bejuma; y Juan Fermín Colmenares en Yaritagua, extendiéndose este conflicto hacia Barcelona región en la cual Pedro Alfaro fue otro de los sacrificados. (Ibíd.; p. 101).

Podemos observar lo exacerbado que estaba el panorama político a nivel nacional, demostrando cuan intensa fue la participación de militares en la política partidista en la Venezuela decimonónica, intromisión que fue una constante desde 1830 hasta 1958. En el

contexto regional, como ya hemos señalado, se suscitaron estas luchas intercaudillistas que fueron corrientemente pugnas intermilitaristas. Frassato (2002), conocedor de la historia regional carabobeña, nos señala sin pretender ser exhaustivo, el cuadro general de los valles occidentales de Carabobo.

La relativa paz del período 1874-1892 en Bejuma fue perturbada en 1876 durante la campaña electoral para seleccionar el sucesor de Guzmán Blanco para el período 1877-1879. Los dos candidatos con más posibilidades eran los generales Francisco Linares Alcántara y Hermenegildo Zavarce... el ambiente se caldeaba y fanatizaba a medida que la campaña avanzaba... En Carabobo eran más fuertes los alcantaristas, mientras que en Yaracuy tenían más seguidores los zavaristas. En el occidente de Carabobo, incluida Nirgua, los choques entre ambos eran cada vez más ásperos y frecuentes, llegando al extremo que en Bejuma la noche del 31 de julio, fue asesinado a machetazos el general alcantarista Julián Castro Briceño, hijo del ex-Presidente Julián Castro. El asesinato lo cometieron en «Combate» unos diez zavaristas dirigidos por el también general Anastasio Balaustren... Parece que la venganza, por este asesinato de un general alcantarista, causó, unos veinte días más tarde, el asesinato del general Juan Fermín Colmenárez en Urachiche (Yaracuy) por ser zavarista. Afortunadamente las autoridades de ambos Estados fueron diligentes en apresar y juzgar a los culpables de ambos crímenes y así cesaron los enfrentamientos... siete años más tarde,... Guzmán Blanco por la solemne celebración del Centenario del Natalicio del Libertador, salía, con fecha 24 de mayo de 1883, el *Decreto de indulto al señor general Anastasio Balaustren*. (Itálicas nuestras). (p. 72)

La situación tanto regional como nacional que hemos reseñado, nos da fe de la existencia de movimientos político-militares internos producto de adhesiones políticas con algún caudillo o revolución nacional en marcha. El hecho histórico regional se materializó en concordancia con lo que estaba pasando en el país, la escogencia del primer magistrado nacional derivada de la finalización del Septenio guzmancista.

Los conflictos políticos electorales a los cuales hemos venido haciendo referencia para nada debilitaban el gobierno de Guzmán Blanco, más bien en los órganos de divulgación como: La Voz Pública y La Opinión Nacional, por citar algunos de estos medios informativos, promovían mediante muchos adeptos la candidatura del «Ilustre Americano» a diversos Estados de la República. En ningún momento ninguna personalidad política o militar se atrevía a contrariar al caudillo máximo, todo lo contrario, las páginas de estos canales comunicativos fueron plagadas de loas y un excesivo culto a la personalidad de Guzmán. Y esto no fue una manifestación fortuita, este fenómeno respondía a una realidad establecida en ese entonces: Guzmán era el caudillo de la unidad nacional, quien gozaba del aparato de la propaganda oficial que era el periodismo. Guzmán logró manipular la opinión pública a través de su aparato de propaganda y de silenciar a sus posibles adversarios.

Si tomamos en cuenta el esquema interpretativo de Urbaneja (1975), Guzmán Blanco formaba parte de un sistema caudillista que había adoptado forma piramidal en cuya cúspide estaba él. Desde este vértice devenían los escalones inferiores que conformaban una red de alianzas propendiendo el orden social hasta lograr cierta estabilidad política. (Ibid.; p135). Nuevamente, el autor aludido asevera que

...esa pirámide caudillista se configura como un conjunto de relaciones de mando intransitivas. Es decir, que el caudillo mayor obtiene la sumisión de los inmediatamente inferiores y éstos a su vez la de los caudillos aún menores y así, en principio, sucesivamente, pero sin que el caudillo mayor pueda contar directamente con la obediencia de toda red o pirámide caudillesca sino a través de la sumisión de cada escalón inferior respecto del escalón superior. (Ibid.; p, 137).

El vínculo establecido de caudillo a caudillo, tal como nos lo comenta Urbaneja no estaba respaldado por normativa legal alguna, era una realidad de hecho; la correspondencia, suscitada entre el caudillo de mayor escalón con el caudillo de menor estrato obedecía a valores como la lealtad, pero también se debía al temor o la conveniencia hacia el caudillo mayor.

El nexa caudillesco al cual hicimos referencia en el párrafo anterior coincide a igual tenor con lo que señalado por la eminente historiadora, Quintero (1989)

...Guzmán, en los hechos, reconoce la cuota de poder que le corresponde a cada uno dentro de su localidad. Se compromete a no interferir en los asuntos regionales, en la medida que las circunstancias así lo permiten e impone su autoridad cuando la situación así lo amerita... a cambio obtiene reconocimiento de la cuota de poder que a él le interesa como jefe del Poder Ejecutivo de una Nación que aún está por integrarse. (p. 21).

En este orden de ideas, es que Guzmán Blanco inserta al sector militar – y sobre este particular lo hemos destacado en líneas precedentes – en la política; reduce de manera estratégica los veinte (20) Estados de la federación a siete (07) circunscripciones militares para el mejor control de este estamento; nombra Delegados Militares, Comisionados Nacionales y Jefe de Operaciones como Zavarce que fue nombrado tal en los primeros años de gobierno de Guzmán después de la derrota que sufrió León Colina. El control que Guzmán Blanco ejerce sobre los puestos o cargos claves (civiles – militares) se desprende de la puesta en práctica, retomando la expresión de Urbaneja, de...»una pluralidad de centros de poder y de decisión que crean cada uno una parcela de orden social«... (Ibid.; p. 135). Es por ello que el Jefe del Partido Liberal Amarillo, según nos comenta Cardoza Sáez (1999), utilizaba la siguiente estrategia... «a los jefes civiles y militares de los respectivos Estados, les estaban subordinados, en el orden militar, todos los jefes y oficiales con mando de fuerza, en los Estados y Departamentos, como jefes natos de sus plazas». (p. 70), táctica que le permitirá a Guzmán detentar el poder sobre el Estado y el Ejército.

No obstante, el abrogarse Guzmán el poder político y militar de la nación no implicó la existencia de un control civil – sobre el militar – efectivo, ni se logró paz en el país, pero sí cierta estabilidad política.

En Carabobo a partir de las elecciones de 1876 serán incesantes los llamados que se harán referente a la recolección de armas³ que estaban esparcidas en Puerto Cabello, Valencia, y La Sierra (denominada ésta por La Voz Pública «centro de revoluciones»), San Joaquín y Tocuyito. Además este clima de hostilidad, de igual forma se expandirá hacia Cojedes, Yaracuy, Bolívar, Barquisimeto (Estado para esa época), Falcón, Táchira y otras regiones.

Con respecto al estado Táchira es importante lo que nos comenta Francisco Alvarado⁴, testigo de excepción y quien ocupó cargos gubernamentales en su lar natal y en la República.

El testificante en su obra narra sobre la situación de enfrentamientos armados que se había vivido antes y en los tiempos de Hermenegildo G. Zavarse quien fungió como Jefe de Armas del Táchira, sostenido en ese cargo por Juan Crisóstomo Falcón quien era su paisano y pariente. La situación de guerra que sufría la entidad federal aludida se prolongaría hasta el año de 1872, tiempo en que fue derrotado León Colina por Antonio Guzmán Blanco. Empero, esta situación conflictiva eclosionaría nuevamente en el año de 1876 cuando se inicie el proceso electoral de donde saldría el sucesor de Guzmán Blanco en vísperas de finalizar el Septenio.

Dos figuras preponderantes – Alcántara y Zavarce – van a capitalizar las simpatías del electorado nacional; en unos estados, tanto el uno, como el otro, van a tener mayoría de sufragantes. Alvarado (1961) nos dice que «el alcantarismo en el Táchira estaba en minoría; en cambio en los otros Estados su mayoría era abrumadora». (p. 205). Las ventajas que uno u otro candidato se llevaban en los diferentes Estados, como ya hemos visto, abrigaban tensiones; otro caso que podemos señalar, retomando al joven Alvarado, es con respecto a un drama sangriento llevado a cabo en junio de 1876 en el estado Táchira, región en la cual se presentaban en la plaza pública los simpatizantes de ambos bandos (Alcantaristas y Zavaristas) para verificar cual de las dos opciones contaba con más afectos. Por supuesto, con anterioridad el Dr. Hernández Sosa (Zavarista) quien ejercía la presidencia del estado Táchira en aquel entonces, ya había armado a sus partidarios y esto ocasionó disparos en contra de los seguidores del alcantarismo. (Ibíd.; p 202).

Como se podrá observar, estos hechos se suscitaban en diferentes regiones, violando de esta manera la Constitución de 1864 que en su título VII, artículo 111 establece: «en los

³ En la Voz Pública (periódico carabobeño) editado de manera continua desde 1875 hasta 1892 se ventiló la pugna caudillista entre alcantaristas y zavarcistas, la hostilidad armada se acentuó entre los meses de abril, mayo y junio de 1876; en este lapso de tiempo este órgano divulgativo reseñó tal situación. En este espacio temporal, el gobierno regional sancionó decretos de recolección de armas para recoger dichos pertrechos que se encontraban en manos de algunos caudillos militares.

⁴ La autobiografía del General Francisco Alvarado: «Memorias de un Tachirense del siglo XIX», es importante para analizar el decurso de los enfrentamientos bélicos a finales del siglo XIX, este autor desnuda en su obra la realidad sangrienta que vivió Venezuela a causa de los enfrentamientos entre caudillos regionales.

períodos eleccionarios de la Nación y de los Estados, la fuerza pública será desarmada; y las leyes respectivas determinarán la manera de efectuarlo» (Santos Rodulfo Cortés, *Antología Documental de Venezuela*, p. 632).

Evidentemente, se puede palpar cómo de manera deliberada se irrespetaba la institucionalidad; la fuerza armada invadía el espacio de la selección de liderazgo concerniente al sector civil de la sociedad, y es que esta situación fue histórica los enfrentamientos armados entre caudillos originados por circunstancias electorales datan de mediados del siglo XIX. Mijares (1967) señala que en las elecciones de 1846 el ambiente estaba impregnado de pugnicidad entre las diversas facciones. (p. 177).

No solamente los afectos o particulares de las candidaturas de Alcántara y Zavarse estaban expuestos a ser perseguidos, incluso muchos de ellos perdieron su vida. De igual forma, hubo Presidentes de Estados unos que dimitieron, otros que fueron depuestos, como los casos de los generales Francisco Alvarado en Táchira, y Hermógenes López – este último fungiría como Presidente de la República desde agosto de 1887 hasta el 5 de julio de 1888 – antes de asumir la primera magistratura nacional este carabobeño en el año de 1876 cuando ocupaba el cargo de Presidente del estado Yaracuy tuvo que renunciar y refugiarse en la localidad de Montalbán del estado Carabobo, porque fue objeto de persecuciones por las facciones alcantaristas.

El panorama electoral en el país era tan hostil que en *La Voz Pública* se hacía referencia a la recolección de armas que debía ejecutarse en Carabobo con la finalidad de reducir la violencia armada en esta región. Y es que si tomamos en cuenta lo que Huntington (1977) refiere, las fuerzas sociales estaban abanderizadas, se vivía en una

sociedad pretoriana...una sociedad politizada... en el entendimiento de que no sólo indica la participación de los militares, sino también la de otras fuerzas sociales... en un sistema social pretoriano las fuerzas se enfrentan desnudas; no se reconocen ni aceptan instituciones políticas, ni cuerpos de dirigentes políticos profesionales, como intermediarios legítimos para moderar los conflictos entre grupos, y lo que es igualmente importante no existe acuerdo entre los grupos en cuanto a cuáles son los medios legítimos y autorizados para solucionar tales conflictos. (pp. 177-178).

Lo que el autor escribe refleja la realidad que provenía del conflicto político eleccionario de 1876, ocurrido en Carabobo y otras regiones del país.

Debe señalarse también, a decir de Perlmutter, que estos hechos de violencia obedecen a «la existencia de esferas sociales que tienen tendencia a estar fragmentadas e incapaces de acción unificada creciente aun para lograr beneficios para un sector particular. (p.96)⁵

⁵ Traducción libre nuestra, Meléndez e Ybarra, de la cita textual de la obra efectuada por Amos Perlmutter: «The military and politics in modern times», año 1978.

Ciertamente, la ocurrencia del fenómeno que hemos venido analizando como consecuencia de la existencia de un Estado central débil, se debía al cuadro social violento de la época, datos de Caballero (1995) expresan tal situación al decir que «entre 1837 y 1903 hubo en Venezuela apenas 16 años de paz contra 66 de guerra civil». (p. 35).

A lo largo del siglo XIX existió el predominio de los caudillos regionales, y con ellos la constante inestabilidad política por los alzamientos, «revoluciones» y montoneras. El caudillismo se reafirmó con la federación: Rangel (1964) afirma que «cada estado de la federación posee su propio ejército, con sus reglamentos y costumbres específicas, y sus intereses políticos muy peculiares. Aquellos ejércitos regionales obedecen al presidente en la medida en que éste coincida con el cacique local». (p.159).

En un contexto más general y citando nuevamente a Perlmutter, este autor nos permite enmarcar la pugna caudillista electoral considerada en un espacio geográfico más amplio, porque él afirma que «históricamente algunas Fuerzas Armadas Latinoamericanas se han aliado con el caudillo, algunas con la aristocracia, una cierta cantidad con los liberales» (Ibíd.; p.100). De hecho, la contienda electoral de 1876 en Carabobo acontece en un tiempo histórico en el cual Guzmán Blanco dirigirá su acción política a crear las condiciones favorables para el establecimiento de un relacionamiento pleno con el capitalismo mundial. Se trataba de instituir el Estado Liberal, animado Guzmán por el espectacular progreso de los Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, y los avances tecnocientíficos llevados a cabo en la Segunda Revolución Industrial, por parte de países de mayor desarrollo productivo como: Inglaterra, Francia y Alemania.

Hubo en la Venezuela del siglo XIX, específicamente en sus últimos tres decenios, algunos rasgos modernizadores que pretendieron erigir el Estado Liberal, si embargo aunado a el conflicto armado – político electoral-, no existía un elemento dinamizante de la economía nacional como lo sería el petróleo en los primeros años del siglo XX, factor que permitirá el ingreso, a las arcas nacionales, de abundantes recursos económicos que propendieran la consolidación de un efectivo Ejército Nacional de mando vertical. De esta forma, afirma Ziems⁶ (1993)

...Gómez utiliza el mecanismo de ejercer siempre la Comandancia en Jefe del Ejército (nombrado por el Congreso), dejando o asumiendo la Presidencia de la República según el interés político del momento. De esta manera, Gómez siempre tuvo en su poder la conducción de la organización castrense. (p. 158).

Con toda la modernización de la fuerza Armada Nacional que produjo Juan Vicente Gómez, logró éste acabar con el caudillaje histórico y ubicarse en la fórmula de poder que nos suministra Irwin (2006), citando a Ramón J. Velásquez, trípode de poder «presidente –

⁶ Véase el artículo: «Un ejército de alcance nacional» de Ángel Ziems, en la obra: «Juan Vicente Gómez y su época», investigación colectiva compilada por Elias Pino Iturrieta, año 1993.

jefe de un efectivo Ejército Nacional y de una administración pública centralizada». (Ibíd.; p. 140).

Gómez se convertirá en un «dictador de orden y progreso» y fungirá como jefe supremo de una efectiva fuerza armada nacional. Logrará el «gendarme necesario» caminar sobre las muletas del positivismo recibiendo el apoyo de los inversionistas extranjeros, gobernando de esta manera por 27 largos años, logrando erradicar el fenómeno caudillista de ejércitos de caudillos particulares de la otrora Venezuela decimonónica.

Consideraciones finales

Hemos podido observar cómo a lo largo del siglo XIX venezolano se suscitaron los enfrentamientos armados entre individualidades y grupos políticos con el firme propósito de llegar al poder.

La única forma de detentar la primera magistratura nacional era la de llegar por la vía de hecho, con todo el ordenamiento jurídico existente, la vía de hecho era la más expedita.

Como ya dijimos la norma jurídica era un traje a la medida de los caudillos, la Constitución en muchos casos fue letra muerta. Los caudillos con sus ejércitos particulares, generalmente, después que éstos resultaban vencedores en las contiendas asumían los cargos de gobiernos y buscaban legitimarse reformando el cuerpo legal de la nación que existía, y de esta manera justificarse como autoridad.

Esta situación trajo como consecuencia que la gerencia política de la sociedad con respecto al sector militar fuese un control civil parcial o no consolidado y así lo fue en el siglo XIX venezolano. Al no haber un efectivo control civil los gobiernos devienen en personalistas y el personalismo se instituye como institucionalidad.

Todas las arbitrariedades y hechos sangrientos cometidos específicamente en el proceso electoral de 1876 en el estado Carabobo y otras regiones del país, ocurrieron sin perturbar el poder personal de Guzmán Blanco, porque los actores de los hechos sangrientos (zavarcistas y alcantaristas) no socavaban las bases del caudillo nacional.

Guzmán Blanco fue la personificación «regeneradora» y «pacificadora» del país, así se publicita en los diferentes diarios de tendencia pro-gumancista. En este sentido se le brindó un excesivo culto a la personalidad de Guzmán Blanco, éste se convirtió en un símbolo en un referente para los diferentes caudillos dominantes de la escena política local, regional y nacional.

La violencia armada presente en el decurso electoral de 1876 demuestra que tan intensa fue la anarquía protagonizada por diversas huestes caudillescas.

Sin embargo, estos actos de desgobierno, Guzmán Blanco los verá como parte de la cotidianidad política del país, lo que sí le importaba a éste es que quien triunfase en la lid electoral le fuese sumiso. Si reunía esta condición gobernaría tomado de la mano del caudillo mayor, si no lo hacía, de todas maneras, estaba propenso a sufrir un golpe de Estado. La

fidelidad de los caudillos menores hacia Guzmán fue lograda cuando éste establece el período gubernamental llamado Bienio, con el firme propósito de dominar a su camarilla, y de esta manera ejercer el control político sobre éstos. Cada quien debía esperar su turno para ver si el caudillo mayor, Guzmán, avalaba la candidatura presidencial de algunos de sus áulicos. Por supuesto, el aspirante rendía pleitesía al venerado «Ilustre Americano».

La creación de las diversas condiciones implantadas por Guzmán Blanco, entre ellas la de dar apariencia de un liberal político obedecía al anhelo de implantar el proyecto del Estado Liberal que desde los primeros años de la República de 1830 se quiso imponer con la finalidad de atraer las inversiones foráneas, no obstante el principal requisito no lo logró establecer como lo fue instituir un efectivo ejército nacional.

Lista de Referencias

- Alvarado, Francisco. (1961). *Memorias de un Tachirense del Siglo XIX*. Biblioteca de temas y autores tachirenses N° 14.
- Caballero, Manuel. (1995). *Gómez, el tirano liberal*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Cardoza Sáez, Ebert. (1999). Caudillismo y militarismo en los andes venezolanos (1859-1903), *Revista de Historia: Presente y Pasado*, año IV, N° 7, 61-88, (enero – junio 1999), Mérida – Venezuela.
- Carrera Damas, Germán. (1991). *Una nación llamada Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- Cortés Santos, Rodolfo. (1971). *Antología documental de Venezuela 1492 – 1900: Materiales para la enseñanza de la historia de Venezuela*. Editorial Pregón.
- Frassato, Luigi. (2002). *Bejuma en el Siglo XIX: Ensayo histórico*. Ediciones de la Universidad de Carabobo y Alcaldía de Bejuma.
- Fundación Polar. (1997). *Diccionario de historia de Venezuela*, tomo 3. 2da edición.
- Gilmore, Robert L. (1964). *Caudillism and militarism in Venezuela, 1810 -1910*. Ohio University Press.
- González Guinan, F. (1954). *Historia contemporánea de Venezuela*. Tomo XI, Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.
- Guardia Rolando, Inés. (2003). El caudillismo: Un actor político relevante en Venezuela a finales del Siglo XIX. En Irwin G. Domingo y Languette Frédérique (comps.), *Militares y Sociedad en Venezuela*: (pp. 104-128). Caracas: UCAB-UPEL.
- Huntington, Samuel P. (1977). *El orden político en las sociedades en cambio*. Buenos Aires: Paidós.

- Irwin G. D., Buttó, L. A. y Langue, F. (2006). *Control civil y pretorianismo en Venezuela*. Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Universidad Católica Andrés Bello.
- Irwin G. Domingo. (1996). *Relaciones civiles – militares en Venezuela 1830 – 1910 (Una visión general)*. Editorial del autor.
- La Voz Pública. Valencia 06 de abril de 1876, número 372
- La Voz Pública. Valencia 11 de abril de 1876, número 373
- La Voz Pública. Valencia 22 de abril de 1876, número 379
- Mijares, Augusto. (1967). *La Evolución Política de Venezuela 1810-1960*. Buenos Aires: Eudeba Editorial Universitaria.
- Perlmutter, Amos. (1978). *The military and politics in modern times*. New Haven and London, Yale University Press.
- Pino Iturrieta, Elías. (Comp.). (1992). *Historia mínima de Venezuela*. Caracas: Fundación de los Trabajadores de Lagoven.
- Quintero, Inés. (1989). El Ocaso de una Estirpe. Alfadil / Trópicos.
- Quintero, Inés. (1994). *El sistema político guzmancista: Tensiones entre el caudillismo y el poder central*. En Quintero Inés (Coord.), Antonio Guzmán Blanco y su Época: (pp. 57-80). Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Rangel, D.A. (1964). *Los Andinos en el poder*. Caracas: Editorial Vadell hermanos.
- Rodríguez Campos, Manuel. (1997). *Revolución Azul*. En Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas: Fundación Polar.
- Rondón Márquez, R.A. (1952). *Guzmán «El Autócrata Civilizador»*. Madrid: Imprenta García Vicente.
- Soriano de G.P., G. (1996). *El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX: criterios y proposiciones metodológicas para su estudio*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.
- Urbaneja, Diego Bautista. (1975). *Caudillismo y pluralismo en el siglo XIX Venezolano*, Revista Politeia, N° 7, Caracas, UCV, Instituto de Estudios Políticos.
- Ziems, Ángel. (1993). *Un ejército de alcance nacional*. En Pino Iturrieta, Elías (Coord.), Juan Vicente Gómez y su época: (pp. 139-168). Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.